

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, cinco (5) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 270

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2018-01089-00
DEMANDANTE:	SANTIAGO CABAL GONZÁLEZ
DEMANDADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP
ASUNTO:	RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar formulada por el señor SANTIAGO CABAL GONZÁLEZ en el proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, en adelante UGPP.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

El demandante solicitó le fuera concedida la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que a continuación se relacionan:

1. Resolución No. RDC-347 del 29 de junio de 2018, por medio de la cual se modifica la liquidación oficial No.2017-00724 del 29 de abril de 2017, determinando por concepto de omisión en las autoliquidaciones y pagos de aportes al sistema integral de la seguridad social integral de la seguridad social por los períodos comprendidos entre el 1/01/2014 al 31/12/2014.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

2. Resolución No. RDO 2017-00724 del 29 de abril de 2017, por medio de la cual se expide la liquidación oficial determinando por concepto de omisión en las autoliquidaciones y pagos al sistema integral de la seguridad social por periodos comprendidos entre el 1/01/2014 al 31/12/2014.

Manifiesta el demandante en su solicitud de medida cautelar, que la misma es completamente viable toda vez que cumple con los requisitos para ser concedida ya que los actos administrativos demandados y solicitados para suspensión de sus efectos son violatorios de las disposiciones normativas invocadas en la demanda y en el escrito de solicitud de medida cautelar.

Ahora bien, con el ánimo de cumplir con los requisitos del artículo 231 del C.P.A.C.A procede el demandante a expresar sus argumentos al respecto.

Señala inicialmente el demandante que los actos administrativos solicitados en suspensión fueron expedidos por el hoy demandado infringiendo las normas legales y constitucionales, ya que por un lado se encuentran estructurados con fundamento en una normatividad que no consagra de manera clara, expresa y contundente la obligación de cotización de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes con contrato diferentes al de prestación de servicios, y por otro lado, los actos administrativos solicitados en suspensión omiten requisitos indispensables para la configuración de un verdadero tributo que cause la obligación de aportar.

Lo anterior, manifiesta el demandante, tiene fundamento en que las contribuciones Parafiscales se encuentran ineludiblemente sujetas a los principios de legalidad, certeza del tributo y reserva de ley, progresividad, equidad, eficiencia como cualquier otro tributo. Así, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, consiste en una contribución parafiscal, ya que constituyen un gravamen que se cobra a un determinado grupo de personas afiliadas al sistema y cuya destinación de recursos es exclusivamente para financiar el mismo sistema, por lo que no entra a las arcas del estado y tiene su base en principios de solidaridad, eficiencia y universalidad. De esa manera, manifiesta el demandante, debe entenderse el concepto de parafiscalidad.

Procede el demandante a afirmar que los tributos deben cumplir con el principio de legalidad del tributo, el cual se desprende del numeral 12 del artículo 150 y 338 de la Constitución Política y de Colombia, el cual se desprende del aforismo "*nullum tributum sine lege*", que exige la creación del tributo a través de la ley y dicha ley debe contar con los elementos del mismo, de manera clara e inequívoca; estos son: Sujeto Activo, Sujeto



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

Pasivo, Hecho Generador, Base impositiva y Tarifa. De modo que los elementos del tributo contribución parafiscal, deben ser claramente definidos por la ley, ordenanza departamental o acuerdo municipal con la suficiente claridad y precisión de los anteriores elementos.

Manifestó, que acorde con lo anteriormente expresado, la Ley 1122 de 2007, no establece los elementos del tributo, sino que la misma exhorta al Gobierno Nacional para que proceda a reglamentar los elementos de la contribución parafiscal, para trabajadores independientes que cuenten con contratos diferentes a los de prestación de servicios, por lo que no se puede configurar de manera fehaciente el tributo legal.

Manifiesta el demandante que mal hace la entidad demandada en segmentar el tributo, ya que promueve la inseguridad jurídica, sobretodo en la situación que hoy se presenta al despacho, ya que la UGPP los elementos de la obligación los determina así: Hecho Generador (Ley 100 de 1993 y Decreto 806 de 1998), Sujeto Activo (Ley 100 de 1993), Sujeto Pasivo (Decreto 1406 de 1999), Base Grávable (Ley 100 de 1993) y Tarifa (Ley 1122 de 2007).

El demandante expresa que no puede la entidad demandada pretender que el trabajador independiente concentre todas las normas que, según la UGPP, configuran los elementos del tributo año a año, pues vulneraría el principio de unidad del tributo, que supone que todos y cada uno de los elementos propios del tributo se encuentren en una sola norma jurídica, de la cual no es ajena las contribuciones, esto con el fin de que el fiscalizado pueda conocer y comprender cuál es efectivamente su obligación, aspecto que fue reglamentado en 2015.

Seguidamente, se expresa que los actos administrativos solicitados en suspensión fueron expedidos con falsa motivación, ya que se han expedido con fundamento en normas que no cuentan con el alcance que la entidad demandada pretendió darles. Manifiesta el demandante que como bien ha sido desarrollado por el Consejo de Estado la existencia de una falsa motivación en el acto administrativo trae como consecuencia la anulación del mismo.

Ahora bien, la falsa motivación se configura porque como bien lo expresa la Ley 1122 de 2007 en su artículo 18, la forma de aseguramiento de los trabajadores independientes contratados mediante contrato de prestación de servicios corresponde al porcentaje obligatorio máximo del 40% sobre el valor mensualizado del contrato, pero para el trabajador independiente mediante contrato distinto al contrato de prestación de servicios, la misma norma citada establece que el Gobierno Nacional reglamentará reglamentará la materia y establecerá un sistema de presunción de ingresos con base en la información de actividades económicas.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

El demandante afirma que solo fue hasta el año 2015, que mediante Ley 1753 se reguló el tema, norma que suplió la Ley 1122 de 2007 que regía en ese entonces.

Los ingresos mensuales obtenidos por el hoy demandante para el año 2014 corresponden a las utilidades reportadas por la sociedad JMC & CIA S.A, de la que es accionista activo, como bien lo demuestra la declaración de renta del año gravable 2014. Así mismo, debe tenerse en cuenta que para dicho año, no existía regulación alguna sobre la obligación de Afiliación y cotización al sistema de seguridad social por cuanto el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 obligaba al Gobierno Nacional a regular el tema para los independientes cuyos ingresos no provenían de contratos de prestación de servicios, tal como en el presente caso, en donde el demandante es un rentista de capital.

Expresa el demandante que los actos administrativos solicitados en suspensión provisional fueron expedidos sin la garantía constitucional básica del debido proceso. El hoy demandado mediante la expedición de los actos administrativos solicitados en suspensión vulneró lo expresado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, ya que aplicó una norma que no es aplicable al caso concreto y por ende dicho acto no debería producir efecto jurídico alguno. Así mismo manifestó que las autoridades públicas, no pueden actuar por fuera de los límites que demarcan las mismas normatividades, los reglamentos y en especial la Constitución, aspecto que fue violentado por la el demandado, al vulnerar el derecho al debido proceso.

Argumenta el demandante que el demandado en la ejecución del proceso administrativo no realizó la debida valoración probatoria, ya que debió tener en cuenta el Acta de Asamblea No. 36 del 20 de marzo de 2014 de la sociedad J.M.C & CIA S.A, en donde se decretó por el órgano colegiado la distribución de las utilidades a los accionistas, dentro de los cuales se encuentra el hoy demandante y cuya acta de distribución prueba que el mismo cuenta con la calidad de rentista de capital y por ende no se encontraba obligado a afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral. Aspecto tal, que acarrea que toda la actuación administrativa se encuentre viciada de nulidad y ello genere un perjuicio irremediable al hoy demandante.

Finalmente, manifiesta el demandante que el demandado ha violentado su derecho a la igualdad, ya que en un caso con similar fundamento fáctico, en fiscalización a la señora María Teresa Gonzalez, igualmente accionista de la sociedad, rentista de capital, si fue tomada en cuenta el



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

Acta de Asamblea No. 36 del 20 de marzo de 2014 en la valoración probatoria realizada por la UGPP

III. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

Manifiesta el demandado que la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos solicitada por el demandante no cumple con los requisitos formales y materiales regulados en el C.P.A.C.A, por ende la solicitud es a que el despacho niegue la medida cautelar invocada por el demandante.

Inicia el demandado su argumentación expresando que conforme a los requisitos del C.P.A.C.A en sus artículos 230 y 231 que regula las medidas cautelares en general y la medida cautelar de suspensión provisional, que, la última, es restrictiva y que solo debe ser decretada cuando fehacientemente, del cotejo que exige la ley se vislumbra vulneración de las disposiciones en las cuales el acto demandado y solicitado en suspensión de sus efectos debería fundarse, aspecto tal, que en el caso concreto no solo no se logra demostrar, sino que a lo largo de su argumentación, el demandante, no realiza el cotejo exigido por la norma, simplemente se centra en manifestar inconformidades frente a los actos administrativos impugnados, aspectos que deben ser analizados por el despacho, pero en etapa de sentencia.

Seguidamente, manifiesta que el proceso de cobro de las sanciones y demás emolumentos impuestos en los actos administrativos hoy demandados, fue suspendido por medio del Auto No. ACC 24178 Expediente de Cobro No. 93027 de Bogotá D.C de 2 de mayo de 2019, ya que el aportante demandó la actuación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y acorde con el artículo 829 del Estatuto Tributario Nacional no se entienden como título ejecutivo las actuaciones administrativas hasta tanto no tengan pronunciamiento jurisdiccional, garantizando así al hoy demandante el debido proceso.

Finalmente el demandado manifiesta que la medida cautelar es innecesaria para proteger y garantizar el objeto del procesos y la efectividad de la sentencia, ya que el mismo demandante no esgrime dichas causales, no manifiesta como si no se concediera dicha medida el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia se verían afectados o en riesgo.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 PROBLEMA JURÍDICO.

El asunto que se discute se contrae a establecer si es procedente decretar



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados.

Para resolver el problema jurídico, se realizará un recuento normativo y jurisprudencial acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, para luego descender al análisis de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto, dejar de presente cuáles son sus requisitos y finalmente aplicarlo al caso concreto.

4.2. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

El artículo 238 de la Constitución Política establece:

"ARTÍCULO 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial".

La Corte Constitucional, en sentencia C-834 de 2013, se pronunció respecto a la finalidad de las medidas cautelares, de la siguiente manera:

"(...) Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (...)"¹.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en el artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para "proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia". Además, indicó que las medidas cautelares proceden: **i)** en cualquier momento; **ii)** a petición de parte debidamente sustentada, y **iii)** en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Martín Bermúdez Muñoz. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso". Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

El artículo 230 del CPACA clasificó las medidas cautelares como: **i) preventivas** (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; **ii) conservativas** (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un *statu quo*; **iii) anticipativas** (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante, y **iv) de suspensión** (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

Los artículos 231 a 233 ibídem determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las medidas cautelares enunciadas en el artículo 230.

Para mayor claridad, el Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento², esquematizó la clasificación de los requisitos de las medidas cautelares, así:

“Requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal y de índole material, para decretar medidas cautelares, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

REQUISITOS PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES		
REQUISITOS DE PROCEDENCIA GENERALES O COMUNES	DE ÍNDOLE FORMAL	Debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 229, Ley 1437 de 2011)
		Debe existir solicitud de parte ³ debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio (artículo 229, Ley 1437 de 2011).
	DE ÍNDOLE MATERIAL	La medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 229, Ley 1437 de 2011).

² CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, providencia del siete (07) de febrero de dos mil diecinueve (2019), rad: 05001-23-33-000-2018-00976-01 (5418-2018).

³ De conformidad con el parágrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las “medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

		La medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria entre la medida a decretar y las pretensiones de la demanda (artículo 230, Ley 1437 de 2011).
--	--	---

Requisitos de procedencia específicos, para decretar medidas cautelares, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

REQUISITOS PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES			
REQUISITOS DE PROCEDENCIA ESPECÍFICOS	SUSPENSIÓN PROVISIONAL	Si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, la cual puede surgir:	a) tras confrontar el acto demandado con estas
			b) tras confrontar, las normas superiores invocadas, con las pruebas.
		Si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios...	Además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios (artículo 231, inciso 2º, Ley 1437 de 2011)
	Si se pretenden otras medidas cautelares diferentes a la de suspensión de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos:	a) Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho;	
		b) Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente la titularidad del derecho o de los derechos invocados;	
		c) Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y	
		d) Que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios (artículo 231,	



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

		inciso 3º, numerales 1º a 4º, Ley 1437 de 2011).
--	--	--

V. CASO CONCRETO.

Como se señaló en el cuadro normativo y jurisprudencial, el examen de procedencia de la medida cautelar requiere verificar inicialmente la concurrencia de los elementos generales que permiten la imposición de la cautela. Estos requisitos generales son de índole formal y material.

Los requisitos de índole **formal** son: 1) Que el proceso judicial sea declarativo; 2) Que la solicitud sea presentada por una de las partes y debidamente argumentada en documento aparte o en la misma demanda.

En cuanto al primero de los requisitos de índole formal, debe manifestarse que efectivamente el proceso judicial es catalogado dentro de los denominados procesos declarativos, ya que el demandante solicita la declaratoria por parte del juez del caso de nulidad de ciertos actos administrativos y luego el restablecimiento del derecho, lo que le permite cumplir el primer requisito de índole formal.

Ahora bien, el segundo requisito de índole formal también puede entenderse cumplido por el demandante en el caso, ya que como bien se vislumbra del cuaderno No. 2 allegado al proceso, el mismo consta de la solicitud de medida cautelar y los argumentos esgrimidos por el solicitante en procura de su concesión.

Los requisitos de índole **material** que ha establecido la ley y desarrollado la jurisprudencia son: 1) Que la medida sea considerada necesaria para proteger y garantizar el objeto del proceso y de la sentencia; 2) Que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa con las pretensiones de la demanda.

En cuanto al primer requisito de índole material manifiesta la sociedad demandante que es de suma importancia que las medidas cautelares solicitadas se concedan, pues de no ser concedida, los efectos de los actos administrativos acusados generan un perjuicio irremediable económico al demandante, ya que se estima que por concepto de la presunta omisión de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la sanción impuesta por la UGPP alcanzan el valor de ciento sesenta y nueve millones noventa dos mil pesos (\$169.092.000) aproximadamente, sin perjuicio de los intereses moratorios que cobra el sistema de registro de planillas PILA, que aproximadamente ascienden a sesenta millones trescientos nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos (\$60.309.854).



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

Ahora bien, el despacho considera que si bien, se encuentra determinado por los actos administrativos demandados el monto que debería pagar el demandante por concepto de aportes y sanción por no aportar al Sistema de Seguridad Social Integral y los eventuales intereses moratorios del PILA, lo cierto es que el mismo, no desarrolla fundamento alguno en cuanto a porqué la concesión de la medida es de vital importancia para preservar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, lo cual conllevaba que el primer requisito de índole material no sea satisfecho, aspecto tal que corresponde a una carga procesal de la parte que solicita la cautela.

En cuanto al segundo requisito general de índole material entra el despacho a analizar la estrecha relación de las pretensiones de la demanda y lo solicitado como medida cautelar. Para ello, vemos que el demandante plantea en la demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo NO. RDC-347 del 29 de junio de 2018, por medio de la cual se modifica la liquidación oficial No.2017-00724 del 29 de abril de 2017, determinando por concepto de omisión en las autoliquidaciones y pagos de aportes al sistema integral de la seguridad social integral de la seguridad social por los períodos comprendidos entre el 1/01/2014 al 31/12/2014, la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$56.162.200), sin perjuicio de la sanción impuesta de CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$112.324.400).

SEGUNDO: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo No. RDO 2017-00724 del 29 de abril de 2017, por medio de la cual se expide la liquidación oficial determinando por concepto de omisión en las autoliquidaciones y pagos al sistema integral de la seguridad social por periodos comprendidos entre el 1/01/2014 al 31/12/2014, la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$56.162.200) y tasó sanción pecuniaria de CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$112.324.400)”.’

Por otro lado, en el escrito donde se solicita la imposición de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos, se hace sobre los siguientes actos administrativos:

(...) se sirva decretar la MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS del Acto Administrativo NO. RDC-347 del 29 de junio de 2018 y RDO 2017-



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

00724 del 29 de abril de 2017 proferidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP.

Luego del análisis de las pretensiones de la demanda y de la solicitud de medida cautelar, puede concluirse que el demandante ha cumplido con el segundo requisito material, ya que las pretensiones de la demanda, van estrechamente relacionadas con los actos administrativos solicitados en suspensión de sus efectos, siendo estos los mismos, por lo que puede predicarse el cumplimiento del segundo requisito de índole material.

Es preciso señalar, que a la parte demandante al solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados se le imponen varias cargas procesales adicionales que deben ser cumplidas y esbozadas en el escrito de solicitud de las medidas con el fin de que las mismas sean concedidas.

La principal carga procesal adicional o específica para este tipo de medida es **demostrar, mediante confrontación entre los actos demandados y la norma superior esgrimida, la violación manifiesta que generan dichos actos**, así mismo, se analiza la violación con respecto a las pruebas allegadas al proceso y como segundo requisito, **cuando el demandante solicite el restablecimiento del derecho, debe probar siquiera sumariamente la existencia de los perjuicios generados**. Por lo anterior, se procede a analizar cada argumento del demandante con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos específicos.

Sobre el primero de los requisitos específicos exigidos para el reconocimiento de la medida cautelar solicitada, debe manifestar este despacho que el demandante no ha cumplido con la carga impuesta, ya que como bien se expresó en líneas pasadas, el mismo se dedica a expresar su inconformidad con respecto a los actos administrativos demandados, arguyendo que se basaron en normas que no regulan el tema y que por ende el mismo no se encontraba obligado a afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral. Dicho aspecto, a la luz de este despacho resulta el *quid* del asunto, siendo esta la razón por la cual el hoy demandante acude al aparato jurisdiccional, por lo cual el mismo, debe ser resuelto en la etapa de sentencia, previo minucioso análisis y debate probatorio.

Finalmente, en cuanto al último requisito específico que desarrolla la parte considerativa del presente auto, debe manifestarse que si bien el demandante expresa un conjunto de perjuicios que pudieren generarse, lo cierto es que del escrito allegado por la contraparte, indica que el proceso de cobro ha sido suspendido mientras perdure el presente proceso judicial, por lo que tampoco puede entenderse, siquiera sumariamente probados los perjuicios causados o generados.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-33-000-2018-01089-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: SANTIAGO CABAL GONZALEZ
: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

En mérito de lo expuesto y sin que implique prejuzgamiento, el despacho:

VI. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados por la parte demandante, en razón de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado